

**EN LOS BARRIOS, EN LAS CALLES Y EN EL ESTADO. LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES ‘TODOTERRENO’ DE
ARGENTINA, A DOS DÉCADAS DEL ‘QUE SE VAYAN
TODOS’.**

Francisco Tomás Longa
CONICET/ Universidad Nacional de Lanús

Eje 1-Movimientos sociales, Actores Sociales y Ciudadanía

Trabajo preparado para su presentación en el XI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), organizado conjuntamente por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y la Asociación Chilena de Ciencia Política, Santiago, Chile, 21, 22 y 23 de julio 2022

Abstract

En diciembre de 2021 se cumplieron veinte años del estallido social de diciembre de 2001 en Argentina, cuando organizaciones sociales y ciudadanos sin afiliación partidaria salieron masivamente a las calles a expresar su descontento ante la crisis económica y política. Unos años antes del estallido, se habían masificado las organizaciones sociales de desocupados, que se organizaron principalmente en las barriadas populares brindando asistencia alimentaria e intentando conseguir puestos de trabajo.

Tras los doce años de gobiernos kirchneristas -entre 2003 y 2015- y el cuatrienio gobernado por Mauricio Macri (2005-2019), el escenario se transformó profundamente. En estos años las organizaciones sociales ampliaron su repertorio de acción de manera notable. Además de continuar asistiendo en las barriadas más empobrecidas con alimentos, las organizaciones dieron vida a proyectos productivos (como cooperativas de trabajo), ámbitos educativos (como escuelas secundarias y primarias autónomas) y espacios de formación política (escuelas, campamentos y talleres de formación). Además, en muchos casos colocaron a sus dirigentes en puestos en el Estado. En esta ponencia se describe esta “gran transformación” del espacio movimientista argentino y se ofrecen algunas líneas interpretativas para comprender cómo mantienen su vitalidad y protagonismo público, tras casi 25 años de haber emergido en un contexto de crisis.

Introducción

A principios de la década de 2000, muchos académicos y activistas visitaron Argentina para conocer el sorprendente protagonismo de los nacientes movimientos sociales. En diciembre de 2001, enormes jornadas de protesta consiguieron destituir al presidente Fernando De la Rúa y a otros tres presidentes que le sucedieron en apenas una semana. Las movilizaciones no cesaban y cientos de miles de personas llenaban las plazas y las calles protestando contra el sistema político y exigiendo un mayor protagonismo en la dirección del país (Scribano y Schuster, 2001). Al mismo tiempo, grupos de desocupados venían organizándose en los barrios más pobres para ayudar a la población con alimentos y trabajo. Los trabajadores de las fábricas ocuparon y autogestionaron empresas que los empresarios había abandonado ante la aguda crisis económica. En los barrios de clase media surgieron cientos de asambleas barriales en las que los vecinos se reunían semanalmente para decidir sobre distintos aspectos de la vida en sus barrios (Dinerstein, 2003).

Los estudios por esos años se ocuparon en resaltar el carácter destituyente de las protestas, que se condensaban en la famosa consigna “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”; esa frase implicaba una crítica radical a los partidos políticos y de hecho trascendió las fronteras¹. Este ciclo de protestas estuvo fuertemente influenciado por un clima ideológico autonomista, que ponía el acento en el protagonismo directo de la sociedad en la toma de decisiones y que venía a cuestionar las viejas formas organizativas de la izquierda y del

¹ En las protestas de 2006 en Ecuador contra el presidente Lucio Gutiérrez, los y las manifestantes también coreaban “que se vayan todos” (Diamint y Tedesco, 2011).

activismo. En los colectivos militantes que impulsaban este tipo de organizaciones, como movimientos de desocupados, fábricas recuperadas y asambleas barriales, podían encontrarse ecos de experiencias de luchas alejadas del poder estatal, como la de los neozapatistas que emergieron hacia el final del siglo XX en Chiapas, México (Dinerstein, 2010). Desde el punto de vista de la teoría política, este clima de época estuvo enmarcado en las lecturas de teóricos como Antonio Negri (Hardt y Negri, 2004) que predicaban, al igual que John Holloway, la vía de “cambiar el mundo sin tomar el poder” (Holloway, 2002). Sin embargo, también algunos señalaron un paradoja, ya que mientras los y las manifestantes buscaban un cambio radical en la escena política, también demandaban el retorno a la normalidad (Svampa, 2008).

Todo este ciclo de protestas fue leído como la clausura parcial del modelo neoliberal en Argentina, que se había aplicado de manera palmaria a partir de las presidencias del peronista Carlos Menem entre 1989 y 1999. Durante sus dos mandatos, Menem aplicó medidas neoliberales que promovía el Consenso de Washington, como el ajuste fiscal y la privatización de las empresas estatales (Vilas, 2000). Además, dictaminó una ley de convertibilidad que igualaba en valor al peso argentino con el dólar estadounidense. Hacia el final de su segunda presidencia, ya los resultados negativos de estas medidas eran inocultables. Para inicios del siglo XXI todos los indicadores sociales y económicos del país habían empeorado. Solo por citar dos de particular importancia, cuando estalló la crisis en 2001 la Argentina tenía casi un 25% de desempleo y para octubre de 2002 la tasa de pobreza alcanzaba al 66% de la población. Este contexto de desempleo inusualmente alto dio lugar a un nuevo actor político: los desocupados. Este sector se conformaba por la gran masa de trabajadores despedidos de las empresas públicas privatizadas por las políticas menemistas. Los desocupados comenzaron a organizarse en Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) y adoptaron el corte rutas y de calles (el piquete) como método principal de protesta, motivo por el cual fueron rápidamente denominados “piqueteros” (Benclowicz, 2011).

El piquete se extendió rápidamente como método de protesta y las organizaciones piqueteras se multiplicaron (Svampa y Pereyra, 2004). El corte de vías fue adoptado por organizaciones barriales de las periferias urbanas, que comenzaron a exigir al Estado la asignación de subsidios y la entrega de alimentos para poder instalar comedores comunitarios. Generalmente los piqueteros bloqueaban las calles durante horas, se enfrentaban a la policía y sufrían la represión, hasta que lograban que los gobiernos accedieran a sus demandas; las principales exigencias al Estado eran de alimentos y subsidios. Como respuesta a las demandas de los piqueteros, el gobierno lanzó subsidios individuales (llamados “planes sociales”), que consisten en una suma de dinero mensual a las personas inscriptas. Además, comenzó a proporcionar alimentos para que las organizaciones ofrecieran almuerzos y cenas en sus locales comunitarios a los más afectados por la pobreza y la indigencia.

El cambio de ciclo

Aunque los piqueteros comenzaron a recibir subsidios y alimentos, la principal respuesta que recibían del Estado era la represión. Hubo numerosos episodios de piqueteros asesinados, como la ‘masacre de Puente Pueyrredón’, en junio de 2002, cuando la policía asesinó a los jóvenes activistas Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y dejó además cerca de 30 personas heridas con balas de plomo. Este escenario se modificó cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003. A principios de la década de 2000, Argentina en particular y América Latina en general experimentaron un “cambio de ciclo” (Svampa 2008a) o un “giro a la izquierda” (Levitsky y Roberts 2011), con la asunción de gobiernos progresistas o de centro-izquierda.

Néstor Kirchner le abrió la puerta del Estado a los movimientos sociales que estuvieran dispuestos a acompañar sus medidas (Natalucci, 2008; Massetti, 2009; Gómez, 2010), tendencia que continuó su sucesora en el cargo, su esposa Cristina Fernández de Kirchner, quien se mantuvo en la presidencia por dos mandatos (2007-2011 y 2011-2015). Así, los piqueteros que provenían principalmente de la tradición ideológica nacional-popular -o directamente del peronismo- se sumaron a las filas del gobierno e incorporaron militantes en el Estado. En general los grupos piqueteros no accedieron a cargos de gran relevancia, pero colocaron a un buen número de militantes en secretarías del Estado y en puestos de trabajo en la burocracia estatal (Rossi, 2017a). Un número más reducido ocupó bancas en diversos concejos deliberantes y órganos legislativos provinciales; y apenas un par de movimientistas pudieron acceder a bancas en el Congreso Nacional durante el kirchnerismo.

Los grupos piqueteros de tradición marxista y autonomista en general rechazaron ser parte del kirchnerismo. Impugnaron la integración al Estado, denunciaron que el kirchnerismo implicaba una continuidad con las políticas de los últimos años (Frente Popular Darío Santillán, 2013 [2007]), y continuaron desarrollándose en el campo social, sosteniendo sus centros comunitarios principalmente en los barrios más empobrecidos de las periferias urbanas.

A finales de 2015, la alianza de partidos de centro-derecha Cambiemos, liderada por el empresario Mauricio Macri, llegó a la presidencia. Era la primera vez en la historia de Argentina que un partido con un perfil nítidamente de derecha llegaba al poder por la vía electoral. Macri desplegó un discurso pro-mercado (Vommaro, 2019), prometió que durante su presidencia “los piquetes no existirán más”² y nombró a los directores generales de las principales empresas privadas en puestos clave de la gestión estatal (Canelo y Castellani, 2016). Los movimientos sociales se re-unificaron en bloque para oponerse a las políticas de Cambiemos. Tanto las organizaciones sociales peronistas como las trotskistas y guevaristas (que se ubican a la izquierda del espectro ideológico), coincidieron en que el gobierno de Macri implicaba un “retorno al neoliberalismo” (Longa, 2021). Las tres organizaciones sociales más importantes del país, el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), comenzaron a ganar espacio en la agenda pública. Desde 2016 realizaron numerosas movilizaciones, entre ellas una jornada anual los días 7 de agosto en consonancia con el día de San Cayetano, santo católico asociado a la búsqueda de empleo. Por ello, en la prensa fueron denominados como los “Cayetanos” o el “triumvirato piquetero”³. A ese conjunto de organizaciones se le sumaron otras como el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). De esa manera, organizaciones peronistas, autonomistas y marxistas se movilizaban conjuntamente para oponerse al gobierno de Macri y, con ello, los viejos compañeros de ruta del mundo piquetero de finales de los '90 -cuyos caminos se habían bifurcado durante el kirchnerismo-, se volvían a encontrar en las calles codo a codo. Aunque ahora, a diferencia de las movilizaciones piqueteras de finales de los '90, cuando estos movimientos pedían principalmente “planes sociales y comida”, como suele repetir el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico⁴, las demandas se habían sofisticado; los movimientos comenzaban a exigir políticas públicas de más largo alcance.

Durante el primer año de gobierno macrista elaboraron y bregaron por la aprobación de una Ley de Emergencia Social. Esta ley institucionalizaba a su sector estableciendo una mesa

² ‘Mauricio Macri: “En nuestra presidencia los piquetes no existirán más”, *Iprofesional*, 20 de mayo de 2014.

³ ‘El triumvirato Cayetano se sindicaliza y gana espacio en el mapa gremial’, *Baenegocios*, 20 de noviembre de 2019.

⁴ ‘Emilio Pérsico: “Tenemos que salir de la política asistencialista”, *Radio Gráfica*, 26 de abril de 2021.

periódica de discusión integrada por el gobierno y las organizaciones sociales. Además, creaba el Salario Social Complementario, una asignación económica pagada por el Estado para los integrantes de esos movimientos, correspondiente al 50% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), cuyo monto se actualizaría automáticamente ante cada suba del SMVM. Producto de esa unidad alcanzada y de su enorme capacidad de movilización, hacia finales de 2016 lograron que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Emergencia Social casi por unanimidad, lo que constituyó un triunfo de los movimientistas en medio del gobierno macrista.

Pero no toda la relación con el gobierno de Cambiemos fue de confrontación. Los movimientos lograron un fluido diálogo principalmente con la cartera nacional de Desarrollo Social, el ministerio que durante los últimos años se ocupó de asistir a la pobreza en el país (Perelmiter, 2012). Este diálogo les permitió gestionar con relativa facilidad algunos planes sociales y subsidios, aún estando ideológicamente en las antípodas del partido en el poder.

Hacia la finalización del mandato de Mauricio Macri, en 2019 Cristina Fernández de Kirchner le propuso a Alberto Fernández encabezar la fórmula presidencial para las nuevas elecciones, reservándose ella el puesto de Vicepresidenta. El espacio pasó a llamarse Frente de Todos (FdT) y sumó al Frente Renovador del dirigente peronista -pero hasta el momento enfrentado con el kirchenrismo- Sergio Massa. Al FdT se fueron sumando personalidades que no venían de la política, como el empresario progresista Matías Lammens y también movimientos sociales de las más diversas corrientes ideológicas. Así, nacía una coalición panperonista (Natanson, 2020) amplia, dispuesta a ganarle a Cambiemos que buscaba ser reelecto. De esa manera, movimientos sociales históricamente peronistas como el Movimiento Evita, pasaron a compartir la misma alianza electoral con movimientos de izquierda que nunca habían tenido participación en un gobierno, como el Movimiento Popular La Dignidad o el Frente Darío Santillán. La unidad que esas organizaciones habían logrado en las calles para enfrentar al macrismo y para demandar leyes y subsidios, se plasmaba ahora también en un frente electoral.

Hacia finales de 2019 el FdT ganó la elección y una vez que asumió Alberto Fernández muchos de estos movimientos pasaron a ocupar cargos de gestión por primera vez en toda su trayectoria; para otros movimientos significó el regreso a los ministerios que ya habían ocupado durante las presidencias kirchneristas.

La gran transformación: los movimientos todoterreno al gobierno

El 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández asumió la presidencia y comenzó a brindar espacios en su gobierno a militantes de movimientos sociales. De parte de las organizaciones, mientras iban asumiendo cargos y colocando cuadros en puestos estatales, seguían desplegando iniciativas en el campo social. Pero todo este proceso se vio trastocado en apenas 90 días por un evento inesperado: la Pandemia de Covid-19. Ni la coalición dirigente (Vommaro y Armesto, 2015) del Frente de Todos ni los movimientistas imaginaron que debían hacerse cargo del país en una situación tan atípica y trágica. Sin embargo, en esta ponencia se sostiene que la emergencia que marcó la Pandemia visibilizó el accionar “todoterreno” de estos movimientos sociales.

Hablar de una presencia “todoterreno” de los movimientos sociales implica que sus actividades, demandas, proyectos y estrategias, ya no se limitan a las tareas barriales o sociales, sino que se han complejizado, llegando a incorporar ámbitos de construcción de poder heterogéneos. En los apartados que siguen se desarrolla este salto “todoterreno” a partir de tres

ámbitos donde los movimientos vienen haciendo incursiones novedosas: el electoral, el sindical y el de la gestión estatal profesionalizada.

El terreno político-electoral

Uno de los aspectos más relevantes de la acción “todoterreno” de estos movimientos se observa en la enorme penetración en el organigrama estatal que están alcanzando en el gobierno. La actual incorporación de militantes de movimientos sociales al Estado es significativamente distinta respecto de las anteriores, cuando tuvo lugar durante el kirchnerismo la “segunda ola de incorporaciones” de los movimientos al Estado (Rossi, 2017b). La diferencia radica en dos aspectos: por un lado esta vez las organizaciones alcanzaron muchos más espacios del organigrama estatal; por otro lado, provienen de un arco ideológico mucho más amplio que en la experiencia anterior (Longa y Vázquez, 2020). Durante las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, la presencia de este tipo de movimientos en el gobierno se centró casi exclusivamente en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN). En cambio, en el gobierno de Alberto Fernández llegaron también a dependencias tan diversas como el Mercado Central de Alimentos; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; la Jefatura de Gabinete de Ministros; el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; el Ministerio de Agricultura y la Cancillería. Respecto de la amplitud ideológica, si durante el kirchnerismo los movimientos integrados provenían centralmente de corrientes del nacionalismo popular o del peronismo, en contraste, en el gabinete del Frente de Todos se constatan dirigentes de raíces guevaristas (del Movimiento Popular La Dignidad), maoístas (de la CCC) y autonomistas (del FPDS), entre otras.

Además de la presencia en diversos ministerios, la gran novedad de esta nueva llegada de movimientos al Estado es el arribo de siete diputados/as movimientistas al Congreso Nacional. Dos de ellos pertenecen a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) (allí está su histórico líder, el dirigente maoísta Juan Carlos Alderete) y otros dos al Movimiento Evita. También los hay del movimiento NuestraAmérica, de Somos-Barrios de Pie y del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la organización “cartonera” más importante del país; todas estas organizaciones son parte activa de la UTEP.

Los desafíos que enfrentan los movimientos en el Congreso son múltiples. En principio sus dirigentes se debaten entre dedicarse por entero a los temas propios de la Economía Popular o implicarse en un conjunto más amplio de asuntos: “no vamos a discutir sólo la agenda de los pobres; vamos a discutir todo, como ellos discuten todo lo nuestro”⁵ planteó a poco de asumir su banca Natalia Zaracho, una joven cartonera del MTE nacida y criada en una barriada pobre de los suburbios de Buenos Aires.

En los años transcurridos desde que llegaron al Congreso, los movimientos lograron acuerdos en algunos temas de agenda. En 2020 el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso impulsó la Ley Ramona, que reconocía la labor de las mujeres que asistieron en los barrios pobres durante la pandemia. Hacia 2021 Federico Fagioli, diputado de NuestraAmérica, impulsó la Ley de personas en situación de calle, que creó centros de integración para acompañar a quienes se encuentran en dicha condición. Unos años antes, también fue aprobada la Ley Micaela, presentada por la diputada del Movimiento Evita Lucila de Ponti, que establece

⁵ Testimonio publicado en *Página/12*, 17 de diciembre de 2021. URL: <https://www.pagina12.com.ar/383135-no-vamos-a-discutir-solo-la-agenda-de-los-pobres-vamos-a-dis>

la capacitación obligatoria cuestiones de género y violencias contra las mujeres, para todos los funcionarios del Estado nacional. En todos estos casos los movimientos se mostraron unificados, se movilizaron al congreso para exigir la aprobación y finalmente lograron que las normativas sean aprobadas. Estas tres normas ya se encuentran promulgadas y reglamentadas. De hecho, a partir de la implementación de la Ley Micaela, en los tres poderes del Estado nacional argentino para diciembre de 2021 ya se habían capacitado 104.600 agentes estatales⁶.

Claro que no todas son confluencias. Los movimientos vivieron una situación dilemática en el Congreso hacia marzo de 2022, cuando el gobierno envió un proyecto para acordar una refinanciación del deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La sigla FMI es sumamente significativa para la memoria colectiva de los sectores movilizadados de Argentina. Se trata de un organismo históricamente vinculado al endeudamiento del país y que suele reclamar planes de ajuste fiscal a los Estados (Cibils, Weisbrot y Kar, 2002). En ese contexto, los/as diputados movimientistas tuvieron un desempeño dispar: algunos votaron a favor y otros en contra. Sucede que los movimientos tuvieron diferentes lecturas económicas acerca de cuál era el mejor escenario para los sectores populares. Algunos sostuvieron que era mejor acordar con el FMI y no entrar en una cesación de pagos con el organismo, mientras que otros planteaban rechazar el acuerdo y explorar vías alternativas de financiamiento. Pero también el sentido del voto tuvo que ver con la afinidad respecto de los espacios político-partidarios dentro de la coalición del gobierno a los cuales están más cercanos: el Movimiento Evita y Somos-Barrios de Pie se encuentran más cercanos al presidente y su entorno, mientras que el MTE y NuestraAmérica se referencian más en la figura de la Vicepresidenta. En la víspera a la votación, mientras Alberto Fernández pedía que acompañen el acuerdo con el FMI, Cristina Fernández de Kirchner opinaba que el acuerdo iba a implicar un ajuste y reclamaba una negociación más dura con el Fondo.

La innovación sindical

Ya desde el año 2011 algunas de estas organizaciones comenzaron a difundir el concepto de Economía Popular. Esta apuesta conceptual tiene lugar en un contexto, en el cual el mercado de trabajo viene mostrando dificultades para incorporar en empleos formales a amplios sectores de la población. Una consecuencia de ello es el crecimiento de los/as trabajadores/as informales, con trabajos precarios e inestables. Los movimientos llaman Economía Popular a quienes trabajan en ese tipo de emprendimientos y en general a quienes cumplen tareas en las actividades de las organizaciones. Así, las personas que cocinan y sirven la comida en los comedores populares, quienes trabajan en las cooperativas de albañilería, de panadería o en cualquier emprendimiento manejado por los movimientos sociales, son parte de la Economía Popular.

Esta denominación ya la venían implementando en el campo académico autores como José Luis Coraggio (1998), uno de los principales expertos en Economía Popular, social y solidaria de América Latina. Pero desde 2011 dirigentes importantes de los movimientos sociales como Emilio Pérsico –líder del Movimiento Evita- o Juan Grabois –dirigente del Frente Patria Grande-, empezaron a utilizar el concepto de Economía Popular para englobar las prácticas de sus militantes (Pérsico y Grabois, 2014). En 2011 los movimientos dieron un primer paso para pensar una asociación gremial que aglutine a quienes trabajan en las distintas actividades de sus organizaciones: algunos grupos como el Movimiento Evita y el Movimiento

⁶ Informe disponible en el sitio web del Ministerio:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/12/informe_de_gestion_mmgvd_2021.pdf

de Trabajadores Excluidos (MTE) lanzaron la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En 2019 dieron un paso más, incorporaron a prácticamente todos los movimientos sociales con presencia nacional que apoyan al gobierno, tales como Barrios de Pie, el Frente Patria Grande y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y lo renombraron Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP). La UTEP es la herramienta sindical que los movimientos crearon para institucionalizar a su sector, buscando negociar paritarias y derechos laborales ante el Estado.

El lanzamiento de la UTEP a fines de 2019 también escenificó el significativo capital político acumulado por este sector⁷. Al lanzamiento concurren importantes personalidades del mundo político y sindical, y el propio presidente de la Nación envió un saludo grabado al acto que fue reproducido en pantallas gigantes. Allí Fernández les dijo: “muchos de ustedes están trabajando con nosotros. Hay un Estado que los reconoce como actores de la realidad argentina. Y hay una sociedad que necesita reconocerlos como tales (...) Así que este paso que están dando es muy importante para el futuro de la sociedad argentina. Los abrazo y les doy toda mi fuerza y mi compromiso”⁸. Actualmente hay 2 millones de personas anotadas en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), un registro oficial del Estado Nacional que se creó por iniciativa de los movimientos. Este universo duplica en tamaño al sindicato más grande del país, el de Comercio, que cuenta con 1,2 millones de afiliados. Hasta la fecha, la UTEP ha logrado afiliar a cerca de 500.000 trabajadores de la economía popular. Es evidente que contar con medio millón de afiliados significa un capital político enorme para la UTEP. Este capital, junto a su capacidad de presión y de negociación en la arena política, le ha permitido ganar espacios de poder.

La profesionalización de la gestión

La tercera dimensión en la cual los movimientos vienen mostrando significativas innovaciones es en la elaboración de proyectos con miras de largo plazo. Uno de los aspectos más notables de la acción todoterreno de estas organizaciones es en medio de la Pandemia -y mientras asumían responsabilidades de gobierno-, multiplicaron su elaboración de políticas públicas, leyes y proyectos de gran escala. Como fue mencionado, impulsaron proyectos que se convirtieron en leyes, lo cual les demandó un saber técnico-legislativo con el que no contaban antes de ingresar a la gestión, y que tuvieron que desarrollar. Para ello, muchos de sus militantes se convirtieron en asesores legislativos, tuvieron que iniciar cursos de formación para aprender a redactar leyes y se adentraron en la formación en técnicas legislativas en el Congreso Nacional. Fruto de ese trabajo, elaboraron proyectos de ley como los ya mencionados y otros que tuvieron gran repercusión en la agenda pública. En mayo de 2022, por ejemplo,

⁷ En esta ponencia consideramos ‘capital político’ al peso político colectivo que construye un movimiento social a lo largo del tiempo, considerado en función de su grado de conocimiento público, de su capacidad de movilización y de su capacidad de instalación de temas de agenda. Pierre Bourdieu analizó la escala individual del ‘capital político’, reconociendo tres especies: el capital personal de notoriedad, “fundado en el hecho de ser conocido y reconocido” (Bourdieu, 1981: 18); el capital personal de corte heróico, ligado al carisma y generado como resultado de alguna acción sobresaliente generalmente en contextos de crisis; y el capital delegado de autoridad política que “es controlado por una institución y transferido de modo condicional por ella a un agente beneficiario” (Joignant, 2012: 595). Algunos trabajos desde la sociología política también contribuyeron a diferenciar un tipo de capital “objetivado de los partidos y de tal partido particular” (Offerlé, 1987: 26), y otro de tipo individual: “capital incorporado, habitus de profesional y/o de militante” (Offerlé, 1987: 26). Otros autores prefieren hablar de “capital militante”, el cual entienden como el que los individuos incorporan “bajo la forma de técnicas, disposiciones para actuar, intervenir, o sencillamente obedecer” (...) [y que] “abarca un conjunto de saberes y de saber hacer movilizables durante las acciones colectivas” (Matonti y Poupeau, 2004: 10).

⁸ El video puede verse aquí: <https://www.facebook.com/watch/?v=624213791655655>

presentaron un proyecto de Ley para que el Estado abone un Salario Básico Universal a quienes se encuentran sin empleo o cuyos salarios no logran cubrir una canasta básica alimentaria. La presentación contó con la presencia de los principales referentes de la UTEP, que dieron apoyo al proyecto y exigieron su aprobación⁹. A su vez, este proyecto se relaciona con un debate global acerca de la necesidad de impulsar un ingreso universal (Varoufakis, 2016), lo que muestra a las organizaciones sociales elaborando proyectos que se relacionan con la agenda internacional de los debates sobre la inclusión y el trabajo.

Por fuera de los proyectos legislativos, los movimientos también vienen diseñando propuestas de políticas públicas para el Poder Ejecutivo. Es el caso del Plan de Desarrollo Humano Integral (PDHI), un ambicioso programa destinado a crear 4 millones de puestos de trabajo, a mejorar las condiciones habitacionales de más de 5 mil barrios populares y a repoblar decenas de ciudades en diversas provincias del país¹⁰. Los movimientos sociales confeccionaron el PDHI junto con sindicatos tradicionales como el de Ferroviarios, el sindicato de la Construcción y otras organizaciones gremiales: “venimos trabajando con Grabois en una alianza estratégica porque tenemos un territorio que prácticamente es el mismo. Los trabajadores que represento entran y salen de la actividad y los movimientos sociales buscan el tránsito de la informalidad a la formalidad”¹¹, declaró en el acto de presentación del PDHI Gerardo Martínez, el Secretario General del histórico sindicato Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); en estas iniciativas, se puede constatar la ambición -pero también la gran capacidad de coordinación con otros sectores- que tienen los movimientos sociales.

Otro ejemplo de esas novedosas intersecciones se vio en medio de la Pandemia, cuando muchos movimientos reconvirtieron sus talleres textiles en fábricas para producir barbijos, altamente demandados para evitar los contagios. Más aún, una de estas organizaciones, el Frente Popular Darío Santillán, se asoció con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET), el mayor organismo científico del país, para producir barbijos con una tela antiviral de bajo costo, desarrollada especialmente por las y los científicos del CONICET. Por esos días la prensa destacaba la novedad así: “Una cooperativa del Frente Darío Santillán produce superbarbijos a precios populares”¹².

Las consecuencias políticas de los movimientos sociales

Estas innovaciones y este crecimiento que se vienen desarrollando, está teniendo un marcado impacto en el campo político-institucional. En los últimos años han proliferado trabajos académicos que ponen el foco en las consecuencias políticas de los movimientos sociales. En la academia estadounidense se trata de un campo más desarrollado, en la medida que hace varias décadas se analiza el impacto en las instituciones estatales del accionar de los movimientos sociales (Giugni, McAdam y Tilly, 1999; Meyer, 2003); actualmente, este campo de estudios se centra en la relación entre los partidos y los movimientos, describiendo cómo a lo largo de la historia estadounidense los movimientos han logrado “anclar” en las agendas de los partidos políticos (Tarrow, 2021).

⁹ ‘El FdT presentó un proyecto para establecer un salario básico universal’, *Télam*, 10 de mayo de 2022.

¹⁰ Los lineamientos principales del PDHI pueden encontrarse aquí: <https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/>

¹¹ <https://agendarweb.com.ar/2020/08/11/movimientos-sociales-y-sindicatos-lanzan-un-plan-para-crear-4-millones-de-puestos-de-trabajo/>

¹² ‘Una cooperativa del Frente Darío Santillán produce superbarbijos a precios populares’, *Tiempo Argentino*, 13 de abril de 2021.

También en América Latina se vienen analizando las consecuencias políticas de los movimientos sociales, principalmente en los contextos de gobiernos progresistas o protagonizados por partidos “basados en movimientos sociales” (Anria, 2019)¹³. Además de los ejemplos de políticas públicas durante el gobierno del MAS en Bolivia (Anria y Niedzwiecki, 2016), estas consecuencias fueron también estudiadas para la experiencia reciente del gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, estudios en los cuales se evidencian las ambivalencias y la heterogeneidad del estado brasileño (Abers y Tatagiba, 2014), así como la capacidad que tuvieron los movimientos de influenciar las políticas públicas (Abers, Serafim y Tatagiba, 2014). En el caso Chileno, las consecuencias políticas de los movimientos sociales fueron leídas principalmente a partir de la influencia institucional ejercida por las movilizaciones estudiantiles, las cuales generaron leyes de democratización de la enseñanza, aunque no de manera inmediata y consecutiva a los ciclos de protesta, sino a partir de un acumulado de acciones en el mediano y largo plazo (Bidegain y Maillat, 2021).

En Argentina, hay varios indicadores acerca del impacto político que están teniendo los movimientos sociales. En primer lugar se debe señalar el marcado perfil orientado hacia el estado y hacia las políticas públicas que viene tomando la agenda y las narrativas de los movimientos sociales y sus dirigentes. Si tomamos como ejemplo el acto del 1 de mayo de 2022, realizado por la UTEP para conmemorar el día internacional de los y las trabajadoras, y analizamos los discursos de los cinco oradores y oradoras que tuvo el acto, allí se puede ver claramente una narrativa fuertemente orientada al Estado. Estas alocuciones estuvieron centradas en la reivindicación del sector de la Economía Popular como parte de la clase trabajadora y en la demanda de derechos, pero también en la búsqueda de lograr leyes y programas estatales que impliquen beneficios para el sector que representan: “necesitamos que se avance en una Ley de Envases (...) en la Ley de Pesca Artesanal, necesitamos, atenti compañeras, necesitamos que se avance en una Ley Nacional de Emergencia en Violencia de Género. Compañeros, compañeras que formamos parte de la economía organizada dentro de la UTEP, tenemos una enorme tarea que es fundamental, que se avance en un Salario Básico Universal para que ninguna persona sea indigente en la Argentina”, dijo Dina Sánchez, Secretaria General Adjunta de la UTEP y referenta del Frente Darío Santillán. Por su parte, Gildo Onorato del Movimiento Evita, planteó: “queremos ratificar nuestra agenda de Tierra, Techo y Trabajo. Muchas leyes duermen en el congreso: la Ley de humedales, el Ingreso Básico Universal, el Monotributo Productivo, la Ley de las trabajadoras del cuidado (...) es urgente la ley de Tierra, Techo y Trabajo”¹⁴.

En lo que refiere a las consecuencias que ya se han cristalizado en políticas públicas, cabe mencionar que desde 2016 el sector de la Economía Popular se articuló dentro de una agenda que tuvo como puntos más altos la sanción de leyes como la mencionada Ley de Emergencia Social y la creación del ReNABaP, un registro para cuantificar la cantidad de barrios populares que hay en el país. Precisamente la política de hábitat y de integración socio-urbana es un buen ejemplo para analizar las consecuencias políticas de los movimientos sociales de Argentina.

¹³ El análisis de Santiago Anria sobre la experiencia del MAS boliviano muestra como consecuencia política de los movimientos la elaboración de leyes, como la Ley de Tierras impulsada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y tramitada en el Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras (Anria, 2019: 145 y ss.), durante la presidencia de Evo Morales.

¹⁴ Las declaraciones pueden consultarse en el acto que se encuentra disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=jeyiCXoy2ls>

El ReNaBaP implicó a los movimientos no solo en la concepción del programa, sino también en su ejecución: el Estado contrató a decenas de miles de integrantes de movimientos sociales que realizaron los relevamientos y las actualizaciones cartográficas del Registro. Gracias a ello, para mayo de 2022 ya se habían contabilizado 6053 barrios populares en todo el país, que aglutinan aproximadamente a 1 millón de familias¹⁵.

La creación del ReNaBaP resultó un punto clave para que los movimientos continúen desplegando políticas públicas en el Estado. Una vez que asumió el gobierno del Frente de Todos, en febrero de 2020 la militante de organizaciones sociales Fernanda Miño asumió como Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU), dependencia que en su momento estaba inscripta en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pero que luego pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social. Miño es una militante social y política nacida y criada en La Cava, una “villa de emergencia” del partido de San Isidro en la Provincia de Buenos Aires. Las también denominadas “villas miseria”, son asentamientos precarios donde viven la mayoría de las familias pobres y en general no cuentan con acceso a necesidades básicas como cloacas o agua potable: “la “villa” constituye no sólo un enclave de pobreza dentro de la ciudad sino también un espacio estigmatizado en donde la trama cultural construye una identidad también estigmatizada en sus habitantes” (Giménez y Ginóbili, 2003: 76). Para revertir dicho estigma, muchas militantes elijen reivindicarse como villeras (Guber, 1984; Cravino, 2002).

Miño es una de las militantes que se reivindican “villeras”, y que asumió el desafío de ocupar un cargo en el actual gobierno nacional. Un ejemplo claro de consecuencia política de la acción de los movimientos sociales es no solo su llegada a la SISU, sino también la creación del Programa Mi Pieza, cuya ejecución está a su cargo. Mi Pieza es un programa destinado a mujeres mayores de 18 años, residentes de barrios populares registrados en el ReNaBaP, que otorga una ayuda económica para realizar obras de albañilería para mejorar las casas donde residen esas mujeres. Para diciembre de 2021 el programa ya había seleccionado a 105 mil familias que serán beneficiarias de esa ayuda. Según sus protagonistas, la propia implementación del programa se está haciendo con la impronta movimientista de las organizaciones de origen de los y las militantes que hoy ocupan la SISU. Las realidades de los barrios populares implican un desafío para la gestión estatal, que se intenta resolver apelando a los ‘saberes militantes’: “tenés mujeres que salieron sorteadas y después no las encontrás más. Por eso vamos contactando a los barrios para que las vayan a buscar y hay un trabajo militante detrás (...) sería imposible llevar adelante una política así si no hay un trabajo militante en el territorio”¹⁶, declaró Miño.

Los estudios recientes sobre las experiencias de los movimientos sociales en la gestión estatal han señalado esta particular manera “militante” de ingresar a las oficinas públicas que tienen los movimientos populares de Argentina (Longa, 2017), transformando al Estado en una burocracia plebeya (Perelmiter, 2016), permeada por las lógicas movimientistas, lo cual se logra a partir de “militar la gestión” (Vázquez, 2014). Como se ve, el accionar de los movimientos está materializándose en programas y en políticas públicas que apuntan a trascender las gestiones de gobierno y consolidarse como políticas de Estado de largo plazo.

¹⁵ Los datos pueden consultarse en: <https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/tabla>

¹⁶ ‘Mi Pieza: ya fueron seleccionadas 105.000 familias para mejorar sus viviendas’, *Télam*, 26 de diciembre de 2021.

Conclusiones

Pasaron 25 años desde la emergencia de los movimientos de desocupados que se popularizaron en la Argentina realizando piquetes, protestas y masivas movilizaciones reclamando comida y trabajo. En estos años, la evolución de este sector es innegable. El recorrido de esta ponencia permite ver cómo fueron complejizando sus tareas, incorporando nuevos repertorios de acción y aumentando los terrenos en los cuales se despliegan y disputan poder.

Este sector pasó de transcurrir “entre la ruta y el barrio”, tomando el título del pionero estudio de Maristella Svampa y Sebastián Pereyra (2004) sobre los piqueteros, a desplegar una acción todoterreno: se manejan por los caminos de los ministerios estatales, transitan las negociaciones de la *realpolitik* y posicionan a sus cuadros con herramientas del marketing político. Evidentemente, han incorporado también experticias propias de la “rosca política”, oficio político que viene captando la atención de la sociología política en Argentina (Gené, 2019).

¿Pero cuáles son los factores explicativos de este crecimiento? ¿Qué dimensiones resaltan al momento de comprender el crecimiento de los movimientos populares? En función del análisis empírico, la conclusión de este trabajo indica que el enorme crecimiento de estos movimientos se debe a la estrategia de poder llevada adelante por las organizaciones, y por haber fortalecido tres dimensiones fundamentales: los recursos organizativos, la identidad y la agenda propia.

Respecto de los recursos organizativos, fue la escuela de estudios estadounidense la que le dio centralidad a la cuestión de los recursos en el desempeño y mantenimiento en el tiempo de los movimientos sociales (McAdam, McCarthy y Zald, 1999). En el caso argentino, los recursos fundamentales de estos movimientos fueron siempre los organizativos. Los movimientos fomentaron la participación de sus militantes en plenarios, asambleas y congresos. Aún en las organizaciones más verticalistas, como el Movimiento Evita, siempre se realizaron Congresos y reuniones masivas en donde la militancia fue escuchada y los rumbos políticos fueron debatidos de manera colectiva al momento de la toma de decisiones (Longa, 2019). Las organizaciones no perdieron la costumbre de fomentar la participación activa de sus militantes en los ámbitos de decisión, ni siquiera en los períodos en los cuales eran parte de un gobierno y tenían que responder a las múltiples demandas que implica gestionar el Estado.

En segundo lugar, cualquier inmersión de campo con estos movimientos demuestra que han forjado entre sus filas una fuerte identidad política. Es cierto que dentro del campo de los movimientos hay diferencias ideológicas. Incluso dentro de la UTEP hay organizaciones maoístas, autonomistas y peronistas. Pero en todos los casos comparten una “identidad plebeya”: se asumen como la representación política y sindical de “los de abajo”, de los más pobres o de, como repiten muchas veces sus dirigentes, “los últimos de la fila”. Desde la escuela europea de estudios sobre movimientos sociales se ha insistido en la importancia de las identidades para explicar los compromisos y el mantenimiento de las militancias en los movimientos sociales (Touraine, 1985; Melucci, 1994). En el caso argentino, la apelación identitaria tiene un fuerte componente de cohesión interna: hace sentir a los militantes que son parte de una lucha justa y legítima. Además, los conecta con una historicidad de luchas pasadas en el país¹⁷.

¹⁷ Agradezco al colega Federico Rossi, quien me sugirió considerar el concepto de “historicidad” para comprender la participación militante en estas organizaciones.

En tercer lugar, estos movimientos han mantenido una agenda propia, más allá de las coyunturas políticas y de los diferentes gobiernos que estuvieron en el poder. Durante los últimos quince años han priorizado la defensa de los que protestan, se han movilizadado en contra de la represión policial y han fomentado la institucionalización de la Economía Popular, tanto durante los gobiernos peronistas como durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que muestra la consistencia de una agenda que no se modifica aunque cambien los gobiernos de turno. Así, organización interna, identidad y agenda, son los tres pilares que le dan fortaleza a este sector, que no ha dejado de crecer en estos últimos años.

El próximo escenario electoral en el país, que tendrá lugar en 2023, mostrará si las consecuencias políticas de su paso por la gestión permanecen y se consolidan como políticas de estado de largo plazo, o bien si son erradicadas en caso que gane la presidencia la oposición, cuyo partido más competitivo, ligado a Mauricio Macri, muestra un perfil anti-movimientista. En cualquier caso, el enorme dinamismo del sector de la Economía Popular de Argentina obliga a continuar realizando análisis longitudinales y extendidos en el tiempo, para poder evaluar con mayor rigurosidad la evolución del sector y los grados en los cuales su accionar impacta en el sistema político.

Bibliografía

Abers, Rebecca y Luciana Tatagiba, (2014), “Institutional Activism: Mobilizing for Women’s Health from Inside the Brazilian Bureaucracy”, en Rossi, Federico y Marisa von Bülow (orgs.), *Social Movements in Latin America: New Theoretical Trends and Lessons from a Mobilized Regions*. London, Ashgate.

Abers, Rebecca, Serafim, Lizandra y Tatagiba Luciana (2014). “Repertórios de interação Estado-sociedade em um Estado heterogêneo: a experiência na Era Lula”, en *Dados, Revista de Ciências Sociais*, v. 57, n. 2, pp. 325-357.

Anria, Santiago (2019). “Introduction”, en Anria, Santiago, *When movements become parties. The Bolivian MAS in Comparative Perspective* (pp. 1-29). Cambridge University Press.

Anria, Santiago y Sara Niedzwiecki (2016). “Social movements and social policy: The Bolivian renta dignidad”, en *Studies in comparative international development*, N° 51.3, pp. 308-327.

Benclowicz, José (2011). “Repensando los orígenes del movimiento piquetero: Miseria y experiencias de lucha antes de las contrarreformas de la década de 1990 en el norte argentino”, en *Latin American Research Review*, Vol. 46, N° 2, pp. 79-103.

Bidegain, Germán y Antoine Maillet (2021). “Tracing social movements’ influence beyond agenda-setting: waves of protest, chaining mechanisms and policy outcomes in the Chilean student movement (2006-2018)”, en *Partecipazione e Conflitto*, Vol. 14, N° 3, pp. 1057-1075.

Bourdieu, Pierre (1981). “La représentation politique. Eléments pour une théorie du champ politique”, en *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, vol. 36-37 (febrero-marzo), pp. 3-24.

Canelo, Paula y Ana Castellani (2016). “Empresarios en el Estado. Radiografía del gabinete nacional actual”. *Presentación del Observatorio de las Élités Argentinas*, IDAES–UNSAM, Argentina.

Cibils, Alan, Mark Weisbrot y Debanyi Kar (2002). “La Argentina desde la cesación de pagos: el FMI y la depresión”, en *Realidad Económica*, N° 192, pp. 14-32.

Coraggio, José Luis (1998). “El trabajo desde la perspectiva de la economía popular”. *Economía Popular: una nueva perspectiva para el desarrollo local. Programa de Desarrollo Local, Catillas*. San Miguel (Argentina): Instituto Conurbano-UNGS.

Cravino, María Cristina (2002). “Las transformaciones en la identidad villera...: la conflictiva construcción de sentidos”, en *Cuadernos de antropología social*, Vol. 15, pp. 29-47.

Diamint, Rut y Laura Tedesco (2011). “¿Quién educa a los políticos? Cambios y continuidades en Argentina y Ecuador tras el grito “que se vayan todos”, en *Boletín Elcano*, N° 136, pp. 1-7.

Dinerstein, Ana (2003). “¿Que se vayan todos! Popular insurrection and the Asambleas Barriales in Argentina”, en *Bulletin of Latin American Research*, 22.2, pp. 187-200.

Dinerstein, Ana (2010). “Autonomía en América Latina: entre la resistencia y la integración. Ecos de la experiencia de los Piqueteros”, en *Community Development Journal*, pp. 1-12.

Frente Popular Darío Santillán (2013) [2007]. “El Frente Popular Darío Santillán ante las elecciones del 28 de octubre”, en *Frente Popular Darío Santillán. Breve historia del Frente Popular Darío Santillán*. Selección de documentos 2000-2013. Buenos Aires: área de formación del Frente Popular Darío Santillán, pp. 75-78.

Gené, Mariana (2019). *La rosca política: el oficio de los armadores delante y detrás de escena (o el discreto encanto del toma y daca)*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Giménez, Mabel y María Ginóbili (2003). “Las ‘villas de emergencia’ como espacios urbanos estigmatizados”, en *HAOL*, N° 1, pp. 75-81.

Giugni, Marco, Doug McAdam y Charles Tilly (eds) (1999). *How Social Movements Matter*. University of Minnesota Press.

Gómez, Marcelo (2010). “¿Acerca del protagonismo político y la participación estatal de los movimientos sociales populares: falacias, alucinaciones y cegueras del paradigma normal de análisis” en Massetti, Ástor, Ernesto Villanueva y Marcelo Gómez (comps.). *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario* (65-96). Buenos Aires: Nueva Trilce.

Guber, Rosana (1984). “Identidad social villera. Resignificación de un estigma”, en *Enía*, N° 32, pp. 115-125.

Hardt, Michael y Antonio Negri (2004). *Imperio*. Buenos Aires: Paidós.

Holloway, John (2002). *Cambiar el mundo sin tomar el poder: el significado de la revolución hoy*. Universidad Autónoma de Puebla.

Joignant, Alfredo (2012). “Habitus, campo y capital. Elementos para una teoría general del capital político”, en *Revista Mexicana de Sociología*, 74, núm. 4 (octubre-diciembre, 2012), pp. 587-618.

Levitsky, Steven y Kenneth Roberts (eds.) (2011). *The resurgence of the Latin American left*. JHU Press.

Longa, Francisco y Melina Vázquez (2020). “¿Tres ramas? La composición política del Albertismo”, en *La Nación Trabajadora*. URL: <https://lanaciontrabajadora.com/ensayo/gobierno-alberto/>

Longa, Francisco (2017). “Cuando los movimientos llegan a la oficina. Dilemas del Movimiento Evita en un gobierno municipal de Buenos Aires, Argentina (2004-2015)”, en *(Con)textos: revista d’antropologia i investigació social*, N° 7, 38-54, julio. Universitat de Barcelona.

Longa, Francisco (2019). *Historia del Movimiento Evita. La organización social que entró al Estado sin abandonar la calle*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Longa, Francisco (2021). “Los tres dilemas de los Movimientos Sociales en el gobierno de Alberto Fernández”. Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Ciencia Política, Rosario, 10 al 13 de noviembre.

Masseti, Ástor (2009). *La década piquetera (1995-2005). Acción colectiva y protesta social de los movimientos territoriales urbanos*. Buenos Aires: Nueva Trilce.

Matonti, Frédérique y Franck Poupeau (2004). *Le capital militant. Essai de définition. Actes de la recherche en sciences sociales*, 2004/5, 155, pp. 4-11.

Mc Adam Doud, Mc Carthy John y Zald Mayer (1999), “Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales”, en Mc Adam, Mc Carthy y Zald (comp.), *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*, Madrid, Istmo, pp. 21.-46.

Melucci, Alberto (1994). “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, en *Zona Abierta*, N° 69: 153-180.

Meyer, David (2003). “Social movements and public policy: Eggs, chicken, and theory”, en *CSD Working Papers*, University of California.

Natalucci, Ana (2008). “De los barrios a la plaza. Desplazamientos en la trayectoria del Movimiento Evita”, en Pereyra, Sebastián, Germán Pérez y Federico Schuster (eds.). *La Huella Piquetera, Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001* (117-140). La plata: Al Margen.

Natanson, José (2020). “Argentina el virus y el presidente”, en *Nueva Sociedad*, No 287, mayo-junio, pp. 60-67.

Offerlé , Michel (1987). *Les partis politiques*. París: Presses Universitaires de France.

Perelmiter, Luisina (2016). *Burocracia plebeya: la trastienda de la asistencia social en el Estado argentino*. Universidad Nacional de San Martín.

Perelmiter, Luisina (2012). “La constitución de una autoridad plebeya. El ministerio ‘de la pobreza’ en la Argentina reciente”, en *Revista Polhis*, N° 5, pp. 309-318.

Pérsico, Emilio y Juan Grabois (2014). *Organización y economía popular: nuestra realidad*. CTEP, Asociación Civil de los Trabajadores de la Economía Popular.

Rossi, Federico (2017a). “Más allá del clientelismo: el movimiento piquetero y el Estado en Argentina”, en Almeida, Paul y Allen Cordero Ulate (eds.), *Movimientos sociales en América Latina. Perspectivas, tendencias y casos* (pp. 213-234). CLACSO.

Rossi, Federico (2017b). “La segunda ola de incorporación en América Latina: una conceptualización de la búsqueda de inclusión aplicada a la Argentina”, en *Pobreza, desigualdad y política social en América Latina*, pp. 155-194.

Scribano, Adrián y Federico Schuster (2001). “Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura”, en *OSAL*, N° 5, pp. 17-22.

Svampa, Maristella (2008a). *Cambio de época*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Svampa, Maristella (2008b). “Argentina: una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo”, en *OSAL*, N° 24, pp. 17-49.

Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra (2004). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.

Tarrow, Sidney (2021). *Movements and Parties. Critical Connections in American Political Development*. Cambridge University Press.

Touraine, Alain (1985). *Movimientos Sociales y Actores Políticos en América Latina*. Santiago: OIT.

Varoufakis, Yanis (2016). “The universal right to capital income”, en *Project Syndicate*, N° 31.

Vázquez, Melina (2014). “‘Militar la gestión’: una aproximación a las relaciones entre activismo y trabajo en el Estado en Argentina en las gestiones de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, en *Apuntes*, Vol. XLI, N° 74, pp. 71-102.

Vilas, Carlos María (2000). “¿Más allá del ‘Consenso De Washington’? Un enfoque desde la política de algunas propuestas del Banco Mundial”, en *América Latina Hoy*, Vol. 26, pp. 21-39.

Vommaro, Gabriel y Melchor Armesto (2015). “¿Nuevos políticos en el partido, viejos políticos en las listas? Reclutamiento partidario y división del trabajo político en PRO, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en *Pasado Abierto*, N° 2, pp. 110-132.

Vommaro, Gabriel (2019). “De la construcción partidaria al gobierno: PRO-Cambiemos y los límites del ‘giro a la derecha’ en Argentina”, en *Colombia Internacional*, N° 99, pp. 91-120.